Jovellanos y los orígenes del asambleísmo en España

MARCELINO CUESTA ALONSO, DIANA ARAUZ MERCADO,

JUAN CARLOS OREJUDO PEDROSA

Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Introducción

Con motivo de su incorporación a la Real Academia de la Historia, Jovellanos escribió su *Discurso sobre la legislación y la historia*, en donde desarrolla un interesante análisis a propósito del sistema de gobierno en la Península Ibérica centrado en la época de los visigodos y que le servirá de preámbulo para su defensa del sistema de cortes españolas.

Como buen jurista, conocía perfectamente los orígenes del sistema legislativo español y al mismo tiempo las formas de gobierno en donde se habían formulado dichas leyes. Y a pesar de haber destacado la importancia del dominio romano en la conformación legislativa española, dio mayor realce al periodo visigodo, pues para poder garantizar la convivencia entre godos e hispanos ambos se reunían en asambleas, que según él servían para discutir tanto cuestiones de Estado como eclesiásticas. En ellas se examinaban los problemas del reino y se solucionaban proponiendo y dictando leyes, las cuales no eran otra cosa que la manifestación de la voluntad general y al mismo tiempo la garantía de paz y tranquilidad para todos.

Sin embargo, también destacó que dichas leyes solo hacían alusión al derecho público y a la política superior del reino, mientras que los asuntos particulares debían decidirse a tenor de lo establecido por las costumbres visigóticas.

A lo largo de la ponencia queremos analizar las fuentes del pensamiento de Jovellanos sobre la representación popular en el diseño de las leyes, en donde la tradición tuvo un peso muy importante, así como la obra de Montesquieu *El espíritu de las leyes*. Por lo tanto, queremos ver cómo las ideas parlamentarias que fructificarían posteriormente en la España de principios del siglo XIX, ya estaban presentes en Jovellanos hacia 1780, data en la que elaboró el citado discurso sobre la legislación y la historia.

La importancia de la historia

Cuenta Jovellanos que apenas siendo él un joven magistrado dedicado a los juicios criminales, se tuvo que aplicar al estudio de las leyes para no incurrir en

una mala interpretación de estas. Afirmó que fue entonces cuando se percató del lenguaje enigmático en el que se habían escrito los códigos legales y cómo era necesario introducirse en el campo de la historia para poder aplicar correctamente la ley.

Permitid, pues, señores, que yo saque de este desengaño la materia de mi discurso; permitidme que comunique con vosotros algunas de las reflexiones que me sugirió la misma experiencia, y que me hicieron conocer que el estudio de la historia es del todo necesario al juriconsulto. Este argumento no parecerá ajeno a mi presente obligación ni de vuestro instituto; y yo me resuelvo a tratarle, no solo para daros una prueba de mi razonamiento, sino también del deseo de ocuparme en objetos dignos de verdadera atención. ¡Ojalá que pudiera hacerlo de un modo digno de vuestra sabiduría!¹

Recordando más tarde a Cicerón subrayó la importancia de la citada ciencia para no permanecer en el estado infantil, ya que un hombre que no sabe de historia es como un niño que solo tiene conocimiento del tiempo que le tocó vivir.

Por eso han recomendado tanto este estudio los sabios juriconsultos que hallaron en la historia de todos los pueblos el mejor comentario de sus leyes, Gravina, Heineccio, D'Aguesseau y todos los metodistas. Por eso también el mismo Januario se burlaba de aquellos juristas que, esclavos de la preocupación, se atrevieron a afirmar que el solo estudio de las leyes romanas bastaba para formar un sabio dotado de todos los conocimientos que pueden adornar el espíritu y rectificar el corazón del hombre.²

Para Jovellanos existe una íntima y particular relación entre la historia de cada país y su legislación y en lo que consideraba un argumento particular se centró en el análisis de la legislación española del momento. Sostuvo en ese sentido que el código de leyes aplicado en los tribunales españoles no era otra cosa sino una colección de leyes antiguas y modernas fundidas y renovadas. E incluso las leyes antiguas que ya no se encontraban vigentes, no por eso habían perdido su autoridad primitiva, pues Jovellanos aconsejaba acudir a ellas en el caso de no poder aplicarse la legislación del momento por presentar lagunas en determinadas cuestiones.

Bien comprendemos que sería empresa muy ardua dar la particular descripción de cada uno de estos códigos, y mucho más hacer el análisis de sus leyes. Pero el objeto que seguimos nos obliga a lo menos a pasar, aunque rápidamente, la vista por los más principales, a buscar las fuentes del derecho que cada uno encierra, y a descubrir con la luz de la historia las relaciones que hay entre este derecho y la constitución y costumbres coetáneas. Esta sencilla revisión, más que los más fuertes raciocinios, descubrirá la necesidad de reunir el estudio de la historia al de las leyes. Subamos, pues, a la

¹ JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. *Obras históricas*. México: Porrúa, 1993, pág. 8.

² *Ibidem*, pág. 9.

fueron fuente primitiva de nuestro derecho, y descubramos el antiguo manantial de las leyes que nos gobiernan, y que habiendo tenido su origen bajo la dominación de los godos desde el siglo V hasta el VIII, se obedecen todavía por los españoles del siglo XVIII.³

En ese sentido recordó que los godos trataron de conciliar el interés del pueblo conquistador con la utilidad del conquistado. De ahí que a los primeros se les repartieron dos terceras partes de España y a los segundos se les reservó la otra parte, al tiempo que se les mantuvieron sus costumbres y leyes romanas. Pero el sistema generaba numerosos inconvenientes y sobre todo exponía al reino a una división. Fue entonces cuando se plantearon hacer de los dos pueblos uno solo. Para ello unificaron la fe religiosa en una sola al convertirse los visigodos del arrianismo al catolicismo. Después se permitieron los matrimonios entre visigodos e hispanorromanos, si bien los segundos perdieron sus apellidos para adoptar los de los primeros. Posteriormente se unificó el sistema judicial y legislativo para unos y otros. Con dichas medidas los godos consolidaron su autoridad y garantizaron su dominio sobre la Península Ibérica.

Después de esta época se redujeron a unidad todos los miembros del gobierno, de tal manera que aun aquellas dos potestades, a quienes siempre ha dividido, más que la diferencia de sus objetivos, los encontrados intereses de sus depositarios, se vieron concurrir desde entonces unidas y conformes al arreglo de los negocios públicos.⁴

La costumbre goda de las asambleas

Fue en ese contexto cuando los reyes visigodos, siguiendo sus costumbres, comenzaron a reunir en asambleas a los grandes y a los señores del territorio, así como a los obispos y prelados juntamente con los oficiales de palacio bajo la presidencia del monarca. En dichas asambleas se trataban cuestiones civiles y eclesiásticas; buscaban remedio a los problemas del reino, al tiempo que proponían y dictaban leyes, las cuales pretendían ser una expresión de la voluntad del pueblo manifestada a través de los personajes principales, quienes representaban al Estado y a la Iglesia. Según este asturiano, las asambleas dieron al reino unidad en un tiempo de enfrentamientos continuos entre los distintos bandos en pugna por el poder. Las Cortes servían para dirimir diferencias mediante acuerdos o bien a través de la amenaza y la coacción. Así, se velaba por el cumplimiento de la ley o, según lo requiriesen las circunstancias, se transigía con algunas disposiciones, si ello permitía la conciliación entre los diferentes bandos.

³ *Ibidem*, págs. 9-10.

⁴ *Ibidem*, pág. 10.

Como se puede apreciar, las ideas de Jovellanos, en un tiempo en el que imperaba en España el despotismo, son una defensa de la separación del poder legislativo con respecto al ejecutivo y el judicial, las leyes debían ser aprobadas por las Cortes y, aunque estuviese recordando la práctica en la época visigótica, no cabe duda de que al destacar la importancia de la historia, no hacía sino reivindicar la validez de dicho sistema político. Además recuerda más adelante que los monarcas godos tenían presentes las leyes establecidas por dichas asambleas hasta el punto de recopilarlas y editarlas para que sirviesen de referencia a los jueces del reino. Distinguía igualmente entre el derecho público y la política superior del reino, cuya responsabilidad recaía sobre las asambleas; y en otro orden situaba los asuntos particulares de los que se ocupaban los monarcas. Por lo tanto, no toda la legislación la aprobaban las asambleas, sino que también el monarca conservaba la potestad legislativa. Por ello afirmaba:

Pero las leyes hechas en estas augustas asambleas recaían por la mayor parte sobre objetos respectivos al derecho público y a la política superior del reino. Los negocios de los particulares se decidían entre tanto o por las costumbres góticas, que había recopilado Curcio, o por las leyes de sus superiores, publicadas hasta el tiempo de Leovigildo y agregadas por este a la compilación de Curcio, o, en fin, por las leyes romanas, que obedecían el clero y los españoles, y de que también se hallan vestigios en la compilación de Egica. En suma, las leyes conciliares dieron el último complemento a esta colección. Chidaswinto, Receswinto y Wamba las fueron sucesivamente agregando a la compilación de Leovigildo, hasta que Egica, para quien estaba reservada esta gloria, le dio la última mano, formando el admirable código que hoy conocemos todos con el nombre de *Fuero de los jueces*.⁵

Podría dar la impresión de que Jovellanos se guardaba las espaldas de posibles interpretaciones inquisitoriales para no dar la impresión de estar sugiriendo un cambio en el sistema político español, por aquel entonces aún monárquico y absolutista; sin embargo, resulta llamativo el que se destacase el buen funcionamiento de las asambleas visigóticas y no se comentasen, en cambio, los inconvenientes y problemas que se dieron entre estas y la voluntad de los monarcas godos. No olvidemos que, en general, la época visigoda en España fue un periodo de fuertes convulsiones políticas y los mismos enfrentamientos que se dieron entre ellos propiciaron la rápida conquista de la península por parte de los musulmanes. Sin embargo, Jovellanos, que sabía de las divisiones entre los visigodos, e incluso las mencionó más adelante de forma vaga, prefirió destacar el desempeño de las asambleas, que nos presenta de forma optimista y positiva para establecer luego una continuidad entre estas y las ideas de Montesquieu.

Las fuentes de las leyes permiten descubrir un sistema de gobierno civil, así como las costumbres e ideas políticas de un pueblo. Da la impresión de que

⁵ *Ibidem*, pág. 11.

Jovellanos consideraba que la división del poder y el papel que ejercían las Cortes según el modelo que había defendido Montesquieu, era una antigua costumbre en el reino español y por lo tanto no era una idea política novedosa ni peligrosa; de todos modos todavía faltaban nueve años para que se produjera la Revolución francesa y con ella se cerrasen las fronteras españolas a las ideas políticas de la Ilustración. Esas mismas ideas habían sido defendidas por John Locke; sin embargo, en el discurso Jovellanos solamente citó a Montesquieu.

Tampoco se olvidaría del derecho romano como fuente de la legislación visigoda y por lo tanto española, ni de los decretos conciliares, es decir, las normas establecidas por las autoridades eclesiásticas, que también pasaron a formar parte de la legislación goda. Sobre los concilios afirmó que poco a poco fiscalizaron el sistema legislativo visigodo y terminarían cambiando la constitución de Estado de la misma forma como había sucedido durante el Imperio romano. Es decir, en la medida en que se le otorgó al poder eclesiástico el control de los asuntos del reino, la potestad eclesiástica terminaría sobreponiéndose a la autoridad civil. En ese sentido afirmó:

Un pueblo marcial, ignorante y supersticioso debía tener costumbres sencillas, pero al mismo tiempo rudas y feroces. Para hacerle feliz era menester cultivarle e instruirlo. Los príncipes fiaron este cuidado a los eclesiásticos, únicos depositarios de la instrucción y de la virtud de aquellos tiempos; con el encargo de reformarle, les dieron toda la autoridad precisa para el desempeño. La historia nos lo representa, desde el siglo VII, concurriendo a la formación de las leyes en los concilios. Allí los vemos ocupados, no solo en la reforma de la disciplina eclesiástica, sino también en dictar reglas políticas de conducta a los pueblos, a los magistrados y ministros públicos, a los grandes y señores de la corte, y aun a los reyes mismos. Los oficiales del palacio, los prefectos del fisco, los jueces y altos magistrados debían responder al concilio del buen ejercicio de sus funciones. Aun fuera del concilio ejercían particularmente los obispos una especie de superintendencia general sobre la administración civil, en tanto grado, que de las providencias injustas del magistrado secular se llevaba recurso de fuerza a los obispos. Por este medio la mejor parte de la potestad temporal se subordinó a la eclesiástica, creció ilimitadamente el influjo de los obispos en los negocios públicos, y, en fin, las mismas leyes autorizaron una novedad, que mirada a la luz de las ideas de nuestro siglo, parecerá, no solo extraordinaria, sino también prodigiosa.⁶

Si bien previamente había destacado las buenas intenciones de los obispos que habían evitado la desaparición de la Iglesia en aquel tiempo lleno de enfrentamientos. De todos modos, destacó el hecho de haber sido las leyes conciliares las que por su dureza con los judíos habían provocado que estos, junto con los herederos del rey Witiza, favoreciesen la llegada a la península de los musulmanes y la destrucción del sistema político, legislativo y judicial.

⁶ *Ibidem*, pág. 12.

Y por contraste sería la Providencia la que impediría que se perdiera todo el sistema, pues la protección del cielo permitiría la aparición de la figura del rey don Pelayo y con él la recuperación del sistema político godo y en mayor medida durante el reinado de uno de sus sucesores, Alfonso II el Casto, quien recuperaría el uso de las asambleas. Del sistema político del reino asturleonés pasó luego al castellano, del que destacaría su Fuero Viejo y con él la aparición y consolidación de los privilegios nobiliarios así como los concejos y ayuntamientos que nos resultan más interesantes para nuestra exposición.

Los ayuntamientos castellanos

La necesidad de repoblar los territorios reconquistados a los musulmanes dio lugar a la concesión de fueros y cartas pueblas que concedían a quienes se presentaban a establecerse en dichos lugares una serie de derechos y obligaciones que servían para sustraer a los pobladores de la autoridad de los nobles feudales al tiempo que pasaban a ser protegidos por la corona a través de dichos fueros.

El número de estos códigos se contaría por el de las capitales restituidas o fundadas después de la restauración, si el tiempo y el descuido no hubieran consumido unos y olvidado otros. En aquel tiempo todos querían vivir con leyes propias, y esta máxima se siguió tan tenazmente, que muchas veces se daban a un solo pueblo distintos fueros. En Toledo le obtuvieron de su conquistador, don Alfonso VIII, no solo los castellanos que hicieron la conquista, sino también los antiguos moradores católicos que habían vivido bajo la dominación sarracena, conocidos por el nombre de *mozárabes*. Hasta los extranjeros que habían acudido como auxiliares a la conquista, conocidos generalmente por el nombre de *francos*, lograron también su fuero. Además de esto, estaban otorgados a cada clase particulares fueros; de manera que cada individuo podía vivir confiado en la protección de unas leyes que eran propias, y que se debían interpretar por jueces de su misma clase.⁷

Como se puede ver, Jovellanos recuerda ahora el papel de la ley en la defensa del individuo. Las leyes debían amparar y proteger al individuo de cualquier abuso de las autoridades. Aunque en esos fueros era más importante para Jovellanos el establecimiento de los gobiernos municipales o ayuntamientos.

Los concejos formaron lo que él denomina «pequeñas repúblicas» dotadas de un gobierno «democrático», ya que el pueblo nombraba a todos los miembros del cabildo denominado por Jovellanos «primer senado». Los ayuntamientos tuvieron un papel primordial en el reparto de tierras, algunas de las cuales destinaban al aprovechamiento del común de vecinos y otras al patrimonio de la comunidad, las cuales servían para financiar las necesidades públicas y del Es-

⁷ *Ibidem*, pág. 17.

tado. Además concurrían con fuerzas militares a la guerra cuando el rey los necesitaba y con su voto en las Cortes desempeñaron un papel muy importante en los asuntos del Estado.

Pero este sistema de gobierno, en que estaban como aisladas las varias porciones en que se dividía la nación, hubiera hecho nuestra constitución varia y vacilante, si las Cortes, establecidas desde los primitivos tiempos, no reunieran las partes que las componían, para el arreglo de los negocios que interesaban al bien general. Al principio, como hemos dicho, estas cortes eran también concilios, y en ellas el Rey, los grandes, los prelados y señores arreglaban los negocios del Estado y de la Iglesia. Pero después que la nación creció en individuos y provincias, después que empezaron a distinguirse los tres estados, y después que se fijó la representación y la influencia de cada uno de los negocios, las Cortes solo cuidaron del gobierno civil y político del reino. Todo el mundo sabe cuánto contribuían entonces estas asambleas para conservar la paz interior del reino, y a mantener las clases en su debida dependencia, y a refrenar los excesos de la ambición y del poder de los magnates; en ellas se reunía la voluntad general por medio de los representantes de cada estado, se clamaba por el remedio de los males públicos, se descubrían sus causas, y se indicaban los medios de extirpar los abusos que la relajación o inobservancia de las leyes introducía en los diferentes ramos de la administración pública.⁸

Describe a continuación cuál fue el principal problema de dicho sistema legislativo y de gobierno, que no fue otro sino el poder de los señores y la falta de autoridad por parte de los monarcas. El hecho de que los nobles poseyeran sus propias fuerzas militares les permitía cometer abusos. Los monarcas dependían de esas fuerzas en sus campañas bélicas, pues las mismas Cortes limitaban la posibilidad de conceder nuevos recursos financieros a los príncipes, con lo cual no les quedaba otra alternativa que solicitar tropas a los nobles y concederles a cambio nuevos privilegios. Para debilitar el poder de los señores, los monarcas trataban de dividirlos, pero esas prácticas perjudicaban al pueblo, que sufría los abusos de los nobles.

Entre unos príncipes subordinados y unos señores independientes, ¿qué otra cosa era el pueblo que un rebaño de esclavos, destinados a saciar la ambición de sus señores? Este pueblo que debía mantener con su sudor al Príncipe se ve separado del Príncipe para alimentar la codicia de los señores; y puesto bajo la protección de los señores, se le forzaba a levantar sus manos contra el Príncipe que debía proteger. Ninguna cosa podía librar de esta suerte a un pueblo que no sabía lo que era libertad. Con efecto, la libertad era entonces un bien tan desconocido a la última clase, que los mismos pueblos libres, llamados behetrías, creían no poder vivir sin reconocer un dueño. Para huir de la opresión con que los amenazaba la ambición por todas partes, buscaban un protector y hallaban un tirano; y como el derecho de elección los auto-

⁸ *Ibidem*, pág. 18.

rizaba para abandonarlo, no pudiendo vivir sin obedecer, corrían voluntariamente a otras cadenas; a la manera de aquellos miserables de quienes cuenta Aristóteles que rendían espontáneamente su libertad para asegurar en los horrores del cautiverio una precaria y miserable subsistencia.⁹

Años más tarde su pensamiento evolucionaría, seguramente influido por los acontecimientos de la Revolución francesa, al pretender que las Cortes de Cádiz tuviesen una cámara de representantes de la nobleza que moderase los posibles excesos de la representación popular.¹⁰ Dicho cambio ya fue comentado por Alejandro Diz, quien sostiene que a partir de ese momento se inclinaría por el modelo inglés, de ahí la importancia que luego le otorgará a la representación nobiliaria.¹¹

La multiplicidad de fueros y privilegios hacía de España una especie de confederación compuesta por varias pequeñas repúblicas. La solución vendría entonces de la mano del rey Alfonso X, quien compondría en primer lugar el Fuero de las Leyes, que comenzó a aplicarse en algunas villas y ciudades y más tarde en 1255 fue declarado en Burgos como fuero general para todos los concejos de Castilla. De esa manera se unificaba la legislación que permitió la introducción de las Partidas. Estas sirvieron para limitar el poder y los privilegios de la nobleza, por un lado, y, por otro, para garantizar la libertad de los individuos. El resultado de su introducción fue beneficioso para toda la nación, pues introdujeron los principios de equidad y justicia natural al tiempo que suavizaron la legislación anterior y las costumbres.

Por donde quiera que se abra este precioso código se encuentra lleno de sabios documentos morales y políticos, que suponen en sus autores una ilustración digna de siglos más cultivados. Las obras de los antiguos filósofos, y lo que es más, las de los santos Padres, frecuentemente citados en las Partidas, guiaron a la nación al estudio de la antigüedad profana y eclesiástica, y la inspiraron las máximas de humanidad y justicia, que tanto brillaron en los gobiernos antiguos. Así se fueron poco a poco suavizando la ferocidad y rudeza que inspiraba en los ánimos la esclavitud feudal, el espíritu caballeresco y la ignorancia de los primeros siglos. Desde entonces se empezó a estimar a los hombres, y se hizo más preciosa su libertad; la nación, que ya se congregaba con más frecuencia en las cortes, imbuida ya en mejores ideas, demandaba y obtenía de los reyes algunos reglamentos útiles a la libertad de los pueblos; y por fin la idea de que estos eran el principal apoyo de toda autoridad, y que donde no hay pueblo, no hay tampoco nobleza ni soberanía, despertó el amor a la muchedumbre, y

⁹ *Ibidem*, pág. 19.

¹⁰ ÁLVAREZ-VALDÉS y VALDÉS, Manuel. Jovellanos, caballero de Alcántara, ministro del Consejo de las Órdenes Militares. Su concepto de la nobleza. En LORENZO ÁLVAREZ, Elena de. *La época de Carlos IV (1788-1808)*. Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, pág. 175.

¹¹ DIZ, Alejandro. Progreso frente a revolución. La visión de Jovellanos. En LORENZO ÁLVAREZ, Elena de. *La época de Carlos IV...*, o. cit., pág. 406.

este amor, aunque interesado, fue poco a poco extendiendo la libertad y produciendo todos los bienes a que conduce de ordinario.¹²

Por lo tanto, Jovellanos deja claro que la soberanía y el principio de autoridad no se podían dar sin el pueblo, ya que los hombres eran libres y requerían unas cortes para lograr legislaciones que garantizaran dichos derechos. Y aunque en este discurso no mencionase nada acerca del poder ejecutivo, años más tarde en su *Memoria en defensa de la Junta Central* dejaría en claro que dicho poder le correspondía al rey para velar por el bien y la seguridad del Estado.¹³ Sobre el ejército no hay más que vagas referencias en su discurso; posiblemente Jovellanos no le otorgaba especial importancia como garante de la seguridad del Estado; de hecho, años más tarde y como miembro de la Junta Central, hizo hincapié en que no se diesen demasiados nombramientos militares, y dicha función, además, debía reservarse al poder ejecutivo, es decir, a la Junta Central.¹⁴

El sistema impuesto por las Partidas permitió el crecimiento de las villas hasta convertirse en ciudades. Los gobiernos municipales favorecieron el desarrollo industrial y el comercio que generaron riquezas y permitieron a España ser una nación próspera, culta y poderosa. Las partidas pusieron fin a los privilegios y fueros particulares que habían dividido la soberanía. Las leyes que se formularon después, las pragmáticas, órdenes y reglamentos respectivos a la agricultura, las artes, la industria, el comercio y la navegación; las que confirmaron el gobierno municipal en los pueblos; las que señalaron la jerarquía civil y fijaron la autoridad de los tribunales, jueces y magistrados que la componían, así como las que completaron el sistema civil y económico, tuvieron su origen en ellas.

Concluyó entonces que no se podía conocer el espíritu de las leyes sin el auxilio de la historia.

Confesemos, pues, de buena fe que sin la historia no se puede tener un cabal conocimiento de nuestra constitución y nuestras leyes, y confesemos también que sin este conocimiento no debe lisonjearse el magistrado de que sabe el derecho nacional. Porque, en efecto, ¿cuál es la obligación de un vasallo a quien su príncipe encarga el importante depósito de las leyes? ¿Por ventura bastará que sepa los principios del derecho privado para terminar con equidad y justicia las contiendas de los particulares? Si se trata de defender las prerrogativas de la soberanía, los privilegios del clero y la nobleza, los derechos del pueblo, ¿cómo lo podrá hacer sin saber el derecho público nacional? Sin este conocimiento, ¿cómo podrá saber dónde están los límites de la

¹² JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. *Obras históricas*, o. cit., pág. 22.

¹³ JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. *Memoria en defensa de la Junta Central*, vol. II, estudio preliminar y notas de José Miguel Caso González. Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1992, págs. 144-145.

¹⁴ BLANCO VALDÉS, Roberto L. *Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823*. Madrid: Siglo XXI, 1988, pág. 78.

potestad real y eclesiástica, los deberes del clero y la nobleza, los cargos y obligaciones de los pueblos? ¿Cómo conocerá la jerarquía que preside el gobierno, la autoridad de sus cuerpos políticos y la de cada uno de sus miembros? ¿Cómo la residencia de la soberanía y de la potestad legislativa y ejecutriz, sus modificaciones y sus términos? ¿Cómo, en fin, podrá calcular el grado de libertad política que concede la constitución al ciudadano, y hasta dónde son inviolables por ella los derechos de su propiedad? ¿Cuántas veces en el ejercicio de la jurisdicción criminal se ha desconocido y aniquilado esta libertad política! ¿Cuántas en el uso de la potestad se ha destruido y atropellado este derecho de propiedad! ¿Cuántas, en fin, en la imposición de tributos, en la cantidad y calidad de ellos, y en el modo de recaudarlos, se han vulnerado a un mismo tiempo el derecho de propiedad y la libertad política de los ciudadanos! Pero si el estudio de la historia puede librar de estos males, ¿cómo no temblarán aquellos a quienes separa de él una pereza vergonzosa?

Conclusión

Como se puede ver, Jovellanos encuentra en la historia el instrumento para legitimar las ideas políticas de la Ilustración. Sus comentarios se podrían interpretar como una crítica velada al absolutismo y al gobierno despótico de Manuel Godoy a pesar del apoyo que recibió de este para el Real Instituto de Gijón y que con el tiempo lo nombraría secretario de Gracia y Justicia en 1797.¹⁵ Sus ideas son un claro precedente del constitucionalismo español, que él situaba, más que en las obras de Montesquieu, en la tradición legislativa romana, visigoda y castellana medieval.

Es cierto que en su discurso únicamente pretendía hacer alusión a un sistema político del pasado, pero qué sentido tenía recordarlo sino el de hacer una tenue reivindicación a propósito de un sistema de representación popular existente en el pasado y que por extrapolación también podría funcionar en su tiempo. No cabe duda de que sus ideas políticas formadas en el ambiente de la Ilustración y del conocimiento de la jurisprudencia española nos muestran la coyuntura ideológica que permitiría y explicaría la Constitución de Cádiz de 1812.

En su discurso de ingreso en la Academia de la Historia Jovellanos nos refleja el conocimiento que tenían los ilustrados españoles con respecto a los diferentes sistemas políticos posibles, y su rememoranza del sistema visigótico no deja de ser significativa. Los grandes cambios en la historia siempre han ido precedidos de un proceso de mentalización y este célebre asturiano nos ayuda a comprender el cambio que supuso el paso del antiguo al nuevo régimen. Y aunque él no llegase a ver finalizado dicho proceso, no cabe duda de que fue uno de los precursores este, afrontando con valentía su papel protagónico en la historia de

¹⁵ GARCÍA CÁRCCEL, Ricardo (coord.). *Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones*. Madrid: Cátedra, 2002, págs. 266-267.

España. De todos modos, el pensamiento de Jovellanos reflejado en ese discurso no fue definitivo; con el tiempo, y a tenor de los acontecimientos que le tocó vivir, evolucionaría hasta el punto, como ya vimos, de plantearse la necesidad de poner límites a la representación popular.

Bibliografía

- ÁLVAREZ-VALDÉS Y VALDÉS, Manuel. Jovellanos, caballero de Alcántara, ministro del Consejo de las Órdenes Militares. Su concepto de la nobleza. En LORENZO ÁLVAREZ, Elena de. *La época de Carlos IV (1788-1808)*. Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009.
- BLANCO VALDÉS, Roberto L. *Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823*. Madrid: Siglo XXI, 1988.
- DIZ, Alejandro. Progreso frente a revolución. La visión de Jovellanos. En LORENZO ÁLVAREZ, Elena de. *La época de Carlos IV (1788-1808)*. Oviedo: Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009.
- GARCÍA CÁRCCEL, Ricardo (coord.). *Historia de España. Siglo XVIII. La España de los Borbones*. Madrid: Cátedra, 2002.
- JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. *Memoria en defensa de la Junta Central*, vol. II, estudio preliminar y notas de José Miguel Caso González. Oviedo: Junta General del Principado de Asturias, 1992.
- *Obras históricas*. México: Porrúa, 1993.
- CORONAS GONZÁLEZ, Santos M. El pensamiento constitucional de Jovellanos. *Historia Constitucional*, 2000, 1, págs. 63-96. En <<http://www.seminario-martinezmarina.com/ojs/index.php/historiaconstitucional/article/view/107/91>>.